

Análisis de casos

El febrero boliviano Crisis política y revuelta popular

Pablo Solón **Radiografía de un febrero**

*Claudia Espinoza
y Gonzalo Gozalvez* **Bolivia arrinconada en la azotea de su historia**

Tania Aillón Gómez **La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia**

Álvaro García Linera **Crisis estatal y muchedumbre**



Radiografía de un febrero

Pablo Solón*

* *Investigador
Fundación Solón*

El palacio de gobierno estaba lleno de humo. En las esquinas del hall principal, que tiene las dimensiones de una cancha de voleibol, ardían pequeñas fogatas con las cuales se intentaba alejar los gases lacrimógenos. Unos treinta soldados estaban de cucullas en los pasillos tratando de escapar de sus nocivos efectos. El ministro de Defensa, Freddy Teodovich, conversaba con Waldo Albarracín, Presidente de la Asamblea de los Derechos Humanos: “nosotros no queremos un enfrentamiento con la policía”. Eran las 12.30 del miércoles 12 de febrero. Los periodistas corrían de aquí para allá mientras los encargados de seguridad los arreaban hacia la sala de prensa para que no siguieran husmeando en las intimidades del Palacio. El ministro de la Presidencia, Sánchez Berzaín, más conocido como “el zorro”, bajó con esa sonrisa de siempre: “La situación está siendo controlada, no hay de que preocuparse, el gobierno no es responsable de nada...Mucho gusto, hasta luego”. Afuera, en la Plaza Murillo, llovían los gases lacrimógenos y se escuchaban los primeros disparos.

El Vicepresidente de Bolivia, Carlos D. Mesa, diría semanas después a la Misión Internacional de Lucha contra la Impunidad que visitó Bolivia que, mientras él miraba los disturbios por la ventana pensando en que así debió ser el colgamiento del presidente Villarroel (1947), el actual presidente Sánchez de Lozada conversaba por teléfono con la embajada americana.

Todo comenzó el 9 de febrero cuando el gobierno anunció el “impuestazo al salario” para reducir el déficit fiscal por orden del FMI. Era “impuestazo o gasolinazo”, decía el presidente. El déficit fiscal había crecido al 8,5% por la privatización del servicio de pensiones de los jubilados, y el FMI exigía que se lo redujera a 3,5% para otorgar nuevos créditos. El gobierno presentó la medida como una gran idea: “en vez del gasolinazo que afecta a todos, sólo vamos a afectar a los asalariados que no son una mayoría. Además, lo haremos en una escala gradual que irá desde un descuento del 4,2% para quienes ganan más de 880 Bs (115 u\$s) hasta un descuento del 12% para los que ganan más de 20.000 Bs (2.630 u\$s).”

La chispa que encendió la hoguera

¿Por qué una medida que en teoría sólo afectaba de forma directa a los asalariados, que representan el 10% de la población en Bolivia, provocó una revuelta generalizada del conjunto de la población? El argumento esgrimido por los empresarios era que la disminución de la masa salarial iba a constreñir el consumo, y por tanto iba a afectar más el ya deteriorado aparato productivo. Esto es cierto, pero insuficiente para explicar la rebelión popular.

Los orígenes del 12 y 13 de febrero vienen de mucho más atrás, y no se pueden explicar sólo por la relación causa-efecto de la coyuntura, sino por una acumulación explosiva de diecisiete años de aplicación del modelo neoliberal.

Bolivia vivió en 1952 una gran revolución obrera y campesina que derrotó al ejército, nacionalizó las minas, conquistó el voto universal y realizó la reforma agraria. Esta revolución, sin embargo, fue contenida en los moldes del capitalismo de estado por la traición de las direcciones de la recientemente constituida COB, que confiaron en el MNR¹ y Paz Estensoro antes que en sus propias fuerzas.

Entre 1952 y 1985 Bolivia vivió bajo un capitalismo de estado en el cual las principales industrias, servicios y recursos naturales estaban en manos del Estado. Fueron treinta y tres años de hegemonía casi absoluta del proletariado minero como vanguardia de las luchas sociales. A pesar de los golpes militares y las derrotas que hubo en ese período,

se mantuvo en esencia la estructura del capitalismo estado y la vanguardia minera. La Central Obrera Boliviana era una de las pocas centrales del mundo que abarcaba a casi todos los sectores sociales y que tenía una disciplina y una unidad muy grandes.

En 1982 comenzó el eclipse de la COB y el movimiento minero, cuando la Unidad Democrática y Popular llegó al gobierno. La UDP era un frente visto como de izquierda por la población. En su seno estaban el MNR-I, el PCB y el MIR², que en ese entonces tenía un pasado "cristiano guerrillero". El ascenso de la UDP despertó grandes expectativas. Había ganado tres elecciones seguidas en medio de tres golpes de estado y tres recuperaciones de la democracia. El PCB y el MIR tenían en sus filas a gran parte de los dirigentes sindicales del país.

Pero el gobierno de la UDP fue un total fracaso, y lo peor de todo, una gran frustración. Quiso contentar a moros y cristianos. Sin romper con el FMI ni suspender el pago de la deuda externa, buscó satisfacer las demandas crecientes de obreros y campesinos. El resultado fue trágico para los trabajadores: en ningún otro período de la historia el poder adquisitivo de los salarios cayó tanto como producto de la hiperinflación. Los obreros y campesinos lograron importantes conquistas en el papel, pero en la práctica no había dinero para hacer realidad esas reivindicaciones. Se imprimían billetes sin respaldo, y la inflación trepaba. En vez de parar la sangría de la deuda externa para contar con recursos frescos, la UDP favoreció "de a de veras" a los empresarios, desdolarizando sus deudas. En otras palabras, el Estado asumió la deuda de los empresarios privados.

Del capitalismo de estado al capitalismo neoliberal

En política los errores se pagan. Y el movimiento obrero pagó los platos rotos de ese gobierno. La UDP tuvo que acortar en un año su mandato. En las elecciones de 1985 ganaron los enemigos de antes, la ADN³ en primer lugar, es decir el dictador Banzer, a quien pocos años antes se había derrocado, y el MNR. Paz Estensoro, del MNR, se hizo elegir presidente en el Congreso con apoyo de casi todos los partidos, y comenzó a estabilizar el país sometiendo a los trabajadores, en particular a su vanguardia minera. Más de 30.000 mineros fueron a dar a la calle por los despidos y 10.000 trabajadores industriales quedaron sin trabajo. El modelo neoliberal empezó a aplicarse y a lograr contener la hiperinflación a costa de los trabajadores. La receta neoliberal era simple: sólo hay que gastar lo que se tiene. En síntesis, para gastar menos hay que achicar el aparato del estado despidiendo trabajadores, recortando las conquistas sociales y deshaciéndose de todas las empresas.

Fueron quince años de aplicación casi ininterrumpida del modelo neoliberal en Bolivia. Todas las empresas estatales fueron privatizadas a través de la llamada "capitalización" y

las concesiones a privados. Los hidrocarburos, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, los fondos de pensiones, la electricidad, las empresas mineras, los bosques, casi todo fue privatizado. La banca de fomento vinculada al estado fue declarada en quiebra, las subvenciones a los sectores productivos más desprotegidos fueron suprimidas, la libre importación de productos fue aplicada mucho antes de que entraran en vigencia los acuerdos de la ronda de Uruguay que dieron nacimiento a la Organización Mundial del Comercio. El capitalismo de estado fue desmantelado.

Durante estos quince años hubo muchas luchas de resistencia. Los mineros, los maestros, los trabajadores de la salud, todos a su turno salieron a las calles para oponerse a una y otra medida neoliberal de los gobiernos del MNR, el MIR y la ADN que se sucedieron en el gobierno. Sin embargo, la gran mayoría de esas movilizaciones acabó en derrotas o empates pírricos, en la forma de convenios que nunca se cumplieron.

Todas estas luchas se dieron en medio de una situación de total escepticismo. El fracaso de la UDP, sumado a la caída del bloque de la Unión Soviética y al llamado "fracaso del socialismo", hacía que el pragmatismo y el "sálvese quien pueda" fomentaran la corrupción y el "pasa-pasa" de la gran mayoría de los izquierdistas. El otrora MIR de pasado izquierdista cruzó el río de sangre que lo separaba de la ADN y se puso a cogobernar con el general Banzer. La intelectualidad crítica fue cooptada económica e ideológicamente.

La promesa neoliberal era que el achicamiento del estado y la privatización de sus empresas y recursos iban a atraer a la inversión extranjera. La inversión extranjera directa iba a desarrollar el aparato productivo en crisis y a generar fuentes de trabajo, mejorando el ingreso de todos los bolivianos. Jaime Paz Zamora acuñó el slogan "exportar o morir". Todo el desarrollo del país estaba puesto en manos del mercado y las inversiones externas.

Los años fueron pasando, las empresas se fueron privatizando, pero el anunciado despegue se convirtió en un permanente aterrizaje de panza para la gran mayoría de la población.

El agua es nuestra, icarajo!

La espera se transformó en desesperación. Los partidos del sistema neoliberal (ADN, MIR y MNR) no se dieron cuenta de la situación y siguieron como si nada pasara. Esta vez, buscando privatizar el agua. Presentaron en el parlamento nacional un proyecto de Ley de Agua que privatizaba y mercantilizaba este recurso. Las marchas de protesta co-

“Por primera vez en quince años la población le había ganado al gobierno, había recobrado la confianza y la esperanza en su propia fuerza. A partir de entonces ya nada volvió a ser igual para los neoliberales en Bolivia.”

menzaron desde el campo. El rechazo era muy grande. El gobierno de Banzer dio marcha atrás y pretendió meter por la ventana lo que no había entrado por la puerta. Dio en concesión a una transnacional el servicio de agua potable municipal de la ciudad de Cochabamba, y aprobó en un tiempo record de 48 horas una ley dizque sólo de agua potable y alcantarillado, pero que en su último artículo le otorgaba a la Superintendencia de Saneamiento Básico todas las atribuciones de una Superintendencia de Aguas para todos los usos del recurso hídrico.

La guerra del agua comenzó en enero de 2000. Fue la primera batalla protagonizada sobre todo por los regantes campesinos de Cochabamba. Después vino la segunda batalla en febrero. Una marcha a la plaza principal se convirtió en una verdadera guerra contra la policía y el ejército, que impedían el acceso de los manifestantes a la plaza 14 de septiembre. Dos días enteros duró el combate. Toda la población de la ciudad, la periferia y el campo se movilizó. En cada calle había un bloqueo. Aún en los barrios más acomodados la gente salió a poner algunos trastos viejos en la calle. En las cercanías de la plaza 14 de septiembre se creó en algunas horas toda una red de solidaridad para apoyar a “los guerreros del agua”. De los edificios caían papeles, cartones y maderas para hacer fogatas. En decenas de casas se preparaba comida y refresco. Todas las radios cochabambinas se unieron contra el gobierno. Al cabo de dos días se firmó un convenio muy precario y la multitud entró a la plaza, a “su plaza”.

Para abril de 2000 se fijó la batalla decisiva en Cochabamba. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida que había sido creada hacía menos de seis meses exigía la revocatoria del contrato de concesión a Aguas del Tunari y la modificación radical de la ley de agua potable y alcantarillado. Esta vez el conflicto se extendió por nueve días. El gobierno se jugó a quebrar la lucha de la Coordinadora, persiguiendo y deteniendo a sus dirigentes. Declaró un estado de sitio que por primera vez en quince años de modelo neoliberal no se cumplió, porque la gente le per-

dió el miedo. La lucha no sólo fue en Cochabamba. En La Paz y el resto del país se dieron bloqueos de caminos. El país estaba paralizado. Y entonces se produjo el motín de la policía en La Paz. Este fue el primer motín de magnitud de la época neoliberal.

Frente a semejante situación, el gobierno no tuvo más remedio que romper el contrato y modificar la ley en un tiempo record. Por primera vez en quince años la población le había ganado al gobierno, había recobrado la confianza y la esperanza en su propia fuerza. A partir de entonces ya nada volvió a ser igual para los neoliberales en Bolivia.

En septiembre de 2000 se produjo un bloqueo nacional con gran incidencia en La Paz, que dejó aislada a la ciudad por dos semanas. En 2001 y 2002 se repitieron los bloqueos de caminos en el campo, las marchas, las protestas.

Los campesinos, los cocaleros y los indígenas

El modelo neoliberal golpeó a todos. A los asalariados les inflingió una derrota física con los despidos masivos. A los campesinos e indígenas, en cambio, los hizo a veces retroceder pero nunca los venció. Los productores de coca del Chapare de Cochabamba fueron uno de los sectores más golpeados, con más muertos por disparos de bala del ejército que ningún otro sector, pero nunca se rindieron. La erradicación de plantaciones de coca logró avances importantes a fines de los '90, pero a medida que se acercaba el anhelado sueño de "coca cero" más crecía la resistencia y nuevamente aparecían nuevas plantaciones camufladas en medio de la maleza.

La derrota de la histórica vanguardia minera y del conjunto de los asalariados trajo a primer plano las luchas campesinas, cocaleras e indígenas. La recuperación de su identidad aymara, quechua y guaraní, que en otros tiempos era eclipsada por los conceptos del clasismo obrerista, se empezó a desarrollar. Los movimientos campesino-indígenas empezaron a plantearse la lucha no sólo por la tierra sino también por el territorio. El "territorio" en sus múltiples dimensiones. Por un lado como derecho no sólo al suelo, sino también a los recursos naturales que están en el subsuelo y en el "vuelo", como los árboles, las aves y la biodiversidad, que hoy se quieren concesionar a empresas privadas. Por otro lado, como respeto a sus autoridades originarias, a sus formas de autogobierno, a sus usos y costumbres, a su derecho consuetudinario. "Territorio" entendido no sólo como espacio físico sino como soberanía, como derecho a ser y existir, como identidad cultural, como derecho a ser diferente en un mundo que cada vez tiende más a la uniformización por la globalización.

En Bolivia los campesinos son indígenas. Casi no hay agricultor o habitante del campo que no sea aymara, quechua, guaraní o de algún pueblo indígena. Sin embargo, la re-

volución de 1952, que les dio la reforma agraria y la tierra a los aymaras y quechuas, y no así a los pueblos indígenas del oriente, consideró a los primeros sólo en su dimensión económico-social: "campesinos". Por eso, en general, los aymaras y quechuas eran llamados campesinos y se organizaban en sindicatos o comunidades campesinas, mientras los guaraníes, los ayoreos, los yukis y más de treinta grupos étnicos eran considerados indígenas, selvícolas, que no tenían directamente derecho de propiedad sobre la tierra y que necesitaban de la protección del estado o de algún patrón. En las últimas décadas esta separación entre lo campesino y lo indígena se ha roto. La amplia mayoría de campesinos del occidente reivindica su identidad como aymaras o quechuas. El neoliberalismo y la globalización, en su afán de uniformizar y convertir todo en una mercancía, han acabado fortaleciendo las raíces de la diversidad y la identidad cultural en Bolivia.



Esta emergencia de los campesinos, indígenas y cocaleros, y la constatación de que sus demandas cada vez más chocan con el estado, llevó a los sindicatos campesinos a plantearse la organización de un "instrumento político" para intervenir en las elecciones y en la política en general. Esta propuesta se fue extendiendo por todo el país con motivo de los quinientos años del descubrimiento de América, y donde más éxitos obtuvo fue en el Chapare, en la zona cocalera, y posteriormente en Cochabamba, donde conquistaron cuatro diputaciones y decenas de concejales municipales y alcaldías. El Instrumento Político no es un partido político, según las organizaciones campesinas e indígenas, porque está sometido a la comunidad, porque la organización social elige a sus candidatos y define su política. "Es un instrumento, no una agrupación de políticos profesionales".

Este Instrumento Político, cuyo nombre original era Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, trató en varias ocasiones de obtener su personería jurídica para intervenir en las elecciones. Sin embargo, la Corte Electoral nunca los reconoció. Fue así que participaron de las elecciones en frentes o prestándose siglas, hasta que al final determinaron quedarse con la sigla partidaria del MAS (Movimiento al Socialismo), que era una de las pocas que tenía reconocimiento legal y que sus dirigentes aceptaron traspasarles.

Vísperas de febrero

Hasta las elecciones de junio de 2002 el fenómeno del Instrumento Político era fundamentalmente rural, asentado sobre todo en Cochabamba. En esas elecciones cambió la historia. La acumulación de descontento social, la crisis de los partidos tradicionales, el agotamiento del modelo neoliberal, el descrédito en el sistema democrático, la bronca, la rabia, la impotencia y la soberbia del embajador norteamericano, que llamó abiertamente a votar en contra de Evo Morales, hicieron que el MAS ganara en cuatro de los nueve departamentos, en dos de los tres más importantes departamentos del eje central La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, y que casi terminara primero en las elecciones para presidente.

Sánchez de Lozada fue elegido presidente gracias a la embajada norteamericana, que sentó al MIR y al MNR para que cogobernaran juntos. Los dirigentes del MIR, que antes eran sindicados de narcotraficantes y habían perdido la visa a los Estados Unidos, recuperaron la entrada al país del norte. Todo con tal de parar el fenómeno Evo.

Todos los analistas políticos y la prensa advirtieron que el gobierno de Sánchez de Lozada era muy débil, que debía concertar, que no podía gobernar como antes. Por su parte, el MAS planteaba una oposición nunca antes vista: nada de pegas, nada de con-tubernio. Las propuestas del MAS eran y siguen siendo Asamblea Constituyente Popular y de las Nacionalidad Originarias para refundar el país, recuperación del gas y los hidrocarburos de las manos de las transnacionales, rechazo al ALCA, soberanía y defensa de la hoja de coca. Un programa que para algunos podrá parecer insuficiente pero que en la práctica es una muralla china, porque ninguno de esos puntos es aceptable para el sistema, en especial mientras la embajada norteamericana siga gobernando Bolivia.

Durante los primeros meses de su gobierno, Sánchez de Lozada intentó descomprimir la lucha cocalera estudiando la posibilidad de darle algunas concesiones. Inmediatamente la embajada reaccionó diciendo que eso era inaceptable, y Sánchez de Lozada dio marcha atrás. Sobre los otros puntos la situación es aún mucho menos aceptable para el sistema. La propuesta de Asamblea Constituyente es muy resistida porque, según palabras del propio vicepresidente, la posibilidad de que ganen los sectores antineoliberales es muy grande, y en todo caso podría ser una Constituyente de partidos, pero jamás popular y de las nacionalidades originarias.

El segundo semestre de 2002 fue un permanente amague de conflictos entre las fuerzas sociales y el gobierno. Tanto unas como otro sabían que el choque era inevitable, y cada quien buscaba prepararse a su manera. El MAS y Evo Morales buscaban darle or-

ganicidad a su triunfo electoral, transformar el apoyo electoral en fuerza organizada, sobre todo fuera de Cochabamba. El gobierno quería desgastar al MAS con interminables diálogos y estudios que no llevaban a nada.

El inicio del conflicto se fijó para el 13 de enero de 2003. Ese día, diferentes organizaciones sociales convocaron al bloqueo de caminos por un pliego petitorio de demandas estructurales. La vanguardia fueron los cocaleros, que garantizaron el corte de rutas a pesar de la militarización más grande de los caminos que se haya visto. En el resto del país las movilizaciones fueron creciendo lentamente. Sánchez de Lozada, que hasta entonces había instruido a sus ministros para evitar todo conflicto, salió a reprimir con todo. En menos de 48 horas ya había cuatro campesinos muertos. La represión se hizo salvaje, pero el movimiento no se quebró, y logró incorporar a sectores campesinos de Chuquisaca que fueron decisivos para obligar al gobierno a una salida negociada. El gobierno y la embajada se jugaron a aplastar física y militarmente a los movimientos emergentes, en particular a los cocaleros. Quisieron darles una lección y amedrentar al resto del país. El resultado fue que tuvieron que dar marcha atrás. Enero terminó con más de una decena de muertos por bala y una serie de mesas de diálogo para discutir los temas del gas, la capitalización-privatización, el ALCA, la coca, etc.

Febrero

No sabemos qué razonamiento habrá pasado por las mentes de los estrategas del gobierno y la Embajada para lanzar el "impuestazo". Probablemente creyeron que el movimiento estaba desgastado después de enero. Otros dicen que en verdad querían una reacción popular para terminar lo que no habían podido hacer un mes antes. Los más cercanos al gobierno dicen que jamás se imaginaron una reacción semejante. Lo cierto es que en sus cálculos no entraba el motín policial.

El descontento en la Policía siempre estuvo latente, y ya había dado un dolor de cabeza al gobierno de Banzer. Los policías habían aprendido en abril de 2000, en ocasión de la guerra del agua, que el mejor momento para amotinarse o, como ellos dicen, para "replegarse", es cuando hay conflictos sociales, porque ahí es cuando más poder de presión tienen frente al gobierno. En abril de 2000 lograron que el gobierno cediera parcialmente a sus demandas. Ahora esperaban hacer lo mismo con Sánchez de Lozada.

El motín empezó el 11 de febrero. Esa noche el ministro de Gobierno, en vez de negociar con ellos, fue a emplazarlos para que suspendieran sus medidas de presión. ¿Estupidez del ministro? ¿Política de la embajada para sentarles la mano? Difícil saberlo.

Lo cierto es que al día siguiente el motín que empezó en el GES⁴ de La Paz, a cuadra y media de la casa de gobierno, se esparció como reguero de pólvora por todas las guarniciones de la ciudad de La Paz y el interior del país.

El miércoles 12 de febrero el Palacio de Gobierno amaneció sin protección policial. Los estudiantes del colegio Ayacucho no desperdiciaron la oportunidad, y fueron a apedrear la casa de gobierno. Sánchez de Lozada instruyó la movilización de las Fuerzas Armadas para proteger sus oficinas.

A las 13.30 comenzó una balacera de increíbles proporciones. ¿Quién dio la orden de acribillar las posiciones de la policía que estaban justo en diagonal a los de la casa de gobierno? Hasta el día de hoy todos los ministros callan. El resultado de ese día fueron once policías y cuatro militares muertos. A las 16.30 Sánchez de Lozada apareció por la televisión para anunciar que retiraba el "impuestazo" y llamaba a la pacificación. Nadie le hizo caso. La gente asaltó y quemó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Vicepresidencia. Luego siguieron la sede del MNR, el MIR y la ADN, después una serie de negocios.

A las 18.30 Sánchez De Lozada volvió a aparecer junto a los Comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas para que ellos llamaran a la calma a sus camaradas. La Paz anocheó sin canales de televisión porque todos dejaron de transmitir por temor a ser asaltados por la "turba" y los "vándalos", como les gusta calificarlos.



© Pablo Dalence

Al amanecer del jueves 13 de febrero las radios anunciaron que el gobierno había arribado a un acuerdo con los policías, y que este acuerdo estaba siendo consultado en las distintas guarniciones del país. En las calles no había ningún policía. Su lugar había sido tomado por el Ejército, que rodeó de tanques y carros de asalto los alrededores de la Plaza Murillo. Todos los medios de comunicación llamaron a la población a no salir de sus casas. Sin embargo, la marcha convocada por todas las organizaciones sociales y la oposición fue numerosa. El pedido unánime era la renuncia de Sánchez de Lozada y Carlos Meza.

Ese día murieron más de una decena de civiles por impactos de bala. El gobierno dice que fueron francotiradores que no eran del ejército ni de la policía. En todo caso eran tiradores francos del ejército, que dispararon incluso contra una enfermera y una doctora de la Cruz Roja, tal cual lo muestra un video presentado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. En El Alto también murieron varias personas cuando un helicóptero sobrevolaba la fábrica de Coca-Cola.

Las marchas y movilizaciones también se sucedieron en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Trinidad. Al principio los comentaristas de televisión felicitaban a la marcha de Santa Cruz por su carácter pacífico; luego tuvieron que tragarse sus palabras cuando empezaron a asaltar la casa del MNR. Al final del día la policía volvió a salir a las calles y la situación empezó a calmarse.

Lo que vivió Bolivia durante el 12 y el 13 de febrero no fue fruto del nerviosismo: 33 muertos y 189 heridos no se producen sin que medie orden de autoridad alguna. Y si a estos muertos sumamos los muertos del bloqueo de caminos de enero, resulta que Bolivia, en menos de dos meses, supera el medio centenar de asesinados por balas del ejército.

Tantas víctimas no son casuales, son el resultado de una política de represión y militarización que viene desde el norte y que se expresa en la política guerrillera en Irak, la asonada golpista contra Chávez y el intento de romperle el espinazo a los movimientos sociales y campesinos en Bolivia. Hubo y hay una política consciente de quebrar físicamente el ascenso popular en Bolivia.

Pero de esta contienda quien salió perdiendo fue el gobierno. Muchos dicen que ya es un cadáver político. Puede ser, pero en política los cadáveres aun pueden romper los huesos. El gobierno no reconoce nada. Han pasado tres meses y nadie ha sido detenido a pesar de las imágenes y evidencias. La razón es obvia: si se detiene a un uniformado, sea del Ejército o de la Policía, su institución saldrá a defenderlo. ¿Cómo? Mejor no averiguarlo.

El gobierno por un lado anda pidiendo plata a la cooperación extranjera para reestructurar la policía, y por otro lado apela a la iglesia para que propicie un pacto social,

reencuentro, matrimonio o concubinato entre las fuerzas de oposición encabezadas por el MAS y los partidos del gobierno. La estrategia es clara, ganar tiempo mientras se recomponen las instituciones del orden para garantizar la continuidad del sistema capitalista. España ya le ha ofrecido dinero al gobierno boliviano para “institucionalizar” la entidad policial.

El mes de marzo estuvo marcado por rumores de golpe. La embajada norteamericana entregó un informe de la CIA diciendo que Evo Morales estaba promoviendo un golpe de estado en el cual iba a morir a manos de un ala de su propio partido, el MAS. Las señales de la embajada eran claras: amedrentar y preparar una asonada no para instaurar una dictadura militar, sino para eliminar a los principales líderes de los movimientos sociales.

Varios intelectuales de oposición salieron a decir que para salvar la democracia y evitar el golpe exterminador había que aceptar el pacto social con el gobierno. Otros dijeron que el pacto social era necesario para ganarse a la clase media, que había quedado espantada por la violencia de febrero. Sin embargo, la propuesta no encontró ningún asidero en los dirigentes y las bases de las organizaciones sociales que no quieren saber de pactos con los verdugos de febrero. Si hay un golpe de estado, será promovido por la propia embajada y sectores del gobierno. Querer evitar este peligro aliándose con ellos es una estupidez.

La sociedad boliviana se ha polarizado después de febrero. La clase media acomodada, que antes podía aceptar un discurso progresista, hoy ha pasado a defender férreamente sus privilegios amenazados por la “turba enardecida”. Querer ganar a esa clase media es imposible.

La clave del futuro está en el desenvolvimiento de la clase media baja, de los sectores populares urbanos. Febrero fue una sorpresa no sólo para el gobierno sino también para las fuerzas del MAS, que fueron desbordadas en las ciudades. Quienes estuvieron en las calles el 12 y 13 de febrero no estaban organizados en ninguna fuerza política ni organización social. Evo Morales era sin duda un referente muy importante en el levantamiento, pero no era la dirección real del mismo.

Febrero ha mostrado que no es suficiente el liderazgo y un programa, sino que también es fundamental una organización capaz de abarcar a esos nuevos sectores que surgieron fruto de diecisiete años de modelo neoliberal y que no están organizados en ninguna estructura sindical o social. La organización de amplios sectores no es tarea que se resuelve de la noche a la mañana. La emergencia social en Bolivia requiere de tiempo, propuestas y mucho trabajo para encontrar su cauce.

La crisis económica y política del país no da tregua. El gobierno no puede dar concesiones populistas. La embajada grita a cada instante “mano dura”, como lo demuestra la última comunicación de la Casa Blanca que alerta contra la “mafia cocalera”. Los conflictos sociales se suceden todos los días. La ciudad de La Paz es un marchódromo institucionalizado. La situación económica de amplios sectores de la población es desesperante. Los integrantes de la coalición gobernante se pelean todos los días. Los movimientos sociales tienen un liderazgo y una organización en el campo, pero aún les falta mucho camino por construir en las ciudades. Y todo esto en medio de una situación internacional extremadamente compleja, donde hay una rebelión en curso contra el modelo neoliberal en América Latina que ha generado el establecimiento de gobiernos que guiñan a la izquierda pero siguen por la derecha. Donde el imperialismo se siente ensoberbecido por la invasión de Irak a pesar de las multitudinarias manifestaciones en su contra. En este contexto de polarización, crisis, emergencia y militarización, hay un pueblo que aspira a cambiar la historia.

Notas

- 1 COB: Central Obrera Boliviana; MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario.
- 2 MNR-I: Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda; PCB: Partido Comunista Boliviano; MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
- 3 Acción Democrática Nacionalista.
- 4 Grupo Especial de Seguridad.